Santiago, uno de julio de dos mil nueve.

Vistos:

En autos rol N°995-2007, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, doña Verónica Chacón Nuñez deduce demanda en contra de Foto Stereo S.A., representada por don José Norambuena Maureira, a fin que se declare injustificado el despido de que fue objeto y se condene a la emplazada al pago de las indemnizaciones, recargo legal y demás prestaciones que indica, con costas.

Evacuando el traslado conferido, la demandada solicitó el rechazo de la acción interpuesta alegando que la exoneración de la actora se ajustó a la causal contemplada en el artículo 160 N°1 letra d) del Código del Trabajo, esto es, injurias proferidas por el trabajador al empleador, fundada en la denuncia por acoso sexual efectuada por aquélla y los demás antecedentes que expone.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de doce de junio de dos mil ocho, escrita a fojas 92 y siguientes, acogió la demanda en cuanto declaró injustificado el despido de la actora y condenó a la empleadora al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, recargo legal, remuneraciones y feriado pendientes, reajustes e intereses, con costas.

Se alzó la empresa y la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de veintitrés de febrero de dos mil nueve, que lee a fojas 116, confirmó la decisión de primer grado.

En contra de esta última resolución, Foto Stereo S.A. deduce recurso de casación en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con infracciones de ley que han influido en lo dispositivo de la sentencia, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que describe.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, fundada en que los sentenciadores no apreciaron las pruebas incorporadas por su parte de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pues el mérito de ellos, especialmente de la Resolución de la Inspección del Trabajo, permiten tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los hechos de las injurias se encuentran probados. El análisis de los antecedentes efectuado por el tribunal fue parcial, circunscrito a la prueba testimonial y dejando de lado la documental aportada y el propio tenor de la demanda que da cuenta de hechos que finalmente no fueron probados.

Así, no obstante que la denuncia deducida por la trabajadora ante la Inspección del Trabajo fue desechada, a través de la presente acción insiste, de forma contumaz y antojadiza, en que la falta de prueba de que adoleció su gestión en la sede administrativa en ningún caso supone que el hecho no hubiere ocurrido. Al respecto, destaca las falsedades de todo lo afirmado por la actora en ambas oportunidades y la forma en que ello afectó a la imagen del representante de la empresa denunciado frente a los ejecutivos de la misma y su familia, pues se le ha atribuido una falta de moralidad cuyas consecuencias perjudican considerablemente su fama, crédito e intereses morales.

Indica la empleadora que parte de los razonamientos de los jueces se hacen cargo de situaciones que no condicen con la de autos y los demás concluyen que el hecho en que se fundó el despido no ha sido probado, afirmación que ajena e inconciliable con el mérito del proceso, importa una traición a la lógica y sentido común, una vulneración a las disposiciones que supeditan al tribunal a las reglas de la sana crítica.

Finalmente, la sociedad emplazada expone la manera como los errores denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo atacado.

Segundo: Que en la presente litis, la causal de injurias invocada por la empleadora se fundó en la denuncia de acoso sexual realizada por la trabajadora contra el gerente de la empresa demandada ante la Inspección del Trabajo y que ésta finalmente desechó. No obstante, la actuación habría afectado seriamente al segundo en su honor e imagen.

Tercero: Que considerando imprescindible al efecto la concurrencia del ánimo de injuriar y que tratándose de un motivo de caducidad del contrato laboral, debe tenerse certeza de las faltas, imprudencias o incorrecciones atribuidas al dependiente, los sentenciadores establecieron la insuficiencia de las pruebas allegadas a los autos para tener por configurada la causal de despido esgrimida, no obstante los testimonios presentados por la demandada en relación con la afectación de la honra e imagen del denunciado en la empresa y frente a su familia.

Cuarto: Que la falta de los elementos necesarios para tener por acreditado el presupuesto en que se fundó el despido y, por ende, el motivo legal en que se asiló la empleadora, ha sido corroborada para el tribunal, con la circunstancia que para que una trabajadora decida formular un reclamo por este tipo de conductas y verse expuesta a una situación como la de autos, debe haber existido una acción inicial que vulnere sus derechos y dignidad como dependiente, ya que la Inspección del Trabajo debe ponderar los antecedentes con los que cuenta para iniciar una investigación, sin que sean suficientes los solos dichos de quien se considera afectada.

Agregan los jueces de la instancia que la resolución emitida por la entidad fiscalizadora en relación a la denuncia de la actora, agregada a fojas 10 y siguientes de los autos, en ningún caso señala que la conducta cuestionada no se haya verificado, sino que no existen elementos suficientes para comprobarlas, es decir, hay indicios que pudieran ser considerados configurativos de una conducta de acoso sexual, pero no son bastantes para tenerla por establecida; precisando que aquéllos dan cuenta que el denunciado ha tenido un comportamiento indebido con la demandante que no condice con el ambiente de respeto mutuo que debe imperar en toda empresa y en las relaciones laborales.

Quinto: Que para resolver el recurso planteado, se hace necesario considerar que la imputada a la actora es de aquellas conductas indebidas en relación a las cuales, de ser graves y fehacientemente comprobadas, el legislador autoriza al empleador a poner término a la vinculación, sancionando al trabajador con la pérdida de las indemnizaciones que, en ausencia de las primeras, le habrían correspondido.

La propia severidad del efecto indicado determina que el comportamiento sea de tal naturaleza y entidad que produzcan un quiebre en la relación laboral e impida la convivencia normal entre uno y otro contratante, o bien, se trate de conductas que lesionen y/o amenacen en cierto modo la seguridad y estabilidad de la empresa.

Sexto: Que la injuria al empleador que constituye la causal de despido citada en el presente caso, al igual que ha sido definida en el ámbito penal, importa una expresión proferida o una acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de aquél o de sus representantes en la línea de mando y que conlleva, por ende, la inequívoca intención de lograr ese fin. La concreción de dicho objetivo, sin embargo, plantea en el contexto laboral la necesidad de un análisis caso a caso que conduzca indefectiblemente a un ánimo de denostar a los superiores dadas las circunstancias específicas del hecho en relación a un determinado ambiente de trabajo.

Séptimo: Que en la especie no se trata de ponderar, como lo ha sido en otras ocasiones, la entidad de expresiones calificadas de insolentes o groseras por su receptor, faltas de respeto o de cultura en el trato u otro tipo de comportamientos que disminuyen la posición de aquél frente al resto del personal, sino la aptitud que con miras al mencionado fin, tiene la actuación de la dependiente mediante la cual acude a la autoridad administrativa por considerarse objeto de una actuación reñida con la ley. En efecto, se imputa por la demandada como constitutiva del motivo de exoneración, es decir, de injuria, la denuncia sobre presunto acoso sexual laboral

efectuado por la actora en contra del gerente general de la sociedad emplazada y que causó daño a su honra e imagen. Funda su juicio la empresa en la falsedad y carencia de sustento de la delación referida desde que fue rechazada por la Inspección del Trabajo atendida la falta de elementos de hecho.

Octavo: Que soslayando la acusación que subyace en la nulidad impetrada consistente en la omisión de análisis o estudio parcial de los antecedentes, por cuanto ello obedece a un vicio de naturaleza diferente al que genera el presente recurso, el reproche de fondo de la recurrente se circunscribe a la desatención de la sana crítica que importa la conclusión negativa de los jueces de la instancia, en aparente contraste con el informe negativo de la investigación del ente fiscalizador respecto de la denuncia de la trabajadora. Habiendo sido desechada aquélla, la empleadora arguye en torno a la verificación de la injuria y la reiteración de la misma a través de la acción de autos, que califica de contumaz y antojadiza.

Noveno: Que en el ámbito de la apreciación de la prueba, como ya se dijo, no obstante los testimonios presentados por la empleadora en relación con la afectación de la honra e imagen del denunciado en la empresa y frente a su familia, el tribunal igualmente dejó asentada la insuficiencia de los antecedentes allegados a los autos para tener por acreditado el motivo de exoneración esgrimido, subrayando, precisamente en contraposición, que si bien la resolución de la Inspección del Trabajo fue negativa, ella da cuenta de la existencia de indicios que aún cuando puedan considerarse constitutivos de una conducta de acoso sexual, esto es, de una actuación impropia con la demandante, no son bastantes para tenerlo por establecido.

Décimo: Que de las consideraciones anteriormente descritas no aparece de manifiesto traición alguna a la lógica o las máximas de experiencia que justifique la nulidad pretendida, tanto por encontrarse razonablemente ligadas en ellas la totalidad de los antecedentes de relevancia al efecto, cuanto porque no se desconoce en forma alguna la conclusión del elemento que para la empleadora resulta determinante, sino que se suma a ella la lectura de varias otras apreciaciones que desarrolla el fiscalizador informante y que para los sentenciadores revisten una especial preeminencia, dado el sentido que lógicamente debe adscribirse a una denuncia como la de autos.

Undécimo: Que en este punto del análisis surge como un factor radical y determinante para esta Corte, al igual que lo fue para los jueces del grado, la propia y reiterada decisión de la trabajadora de acusar la conducta ilegítima que la aqueja, primero ante el órgano administrativo competente y luego, ante el tribunal laboral, en esta última oportunidad como consecuencia del despido que su inicial determinación originó. De esta forma, mas allá de la razonabilidad de la perspectiva con que deben apreciarse tales acciones dado el riesgo cierto que conllevan a su titular, como lo destacan los tribunales de la instancia en el caso, la proscripción del ejercicio legítimo de un derecho que la argumentación de la demandada impone, carece de toda lógica desde un punto de vista singular, es decir, de la actuación que se estudia y sus fundamentos, como desde una mirada sistémica del ordenamiento jurídico.

Duodécimo: Que no es posible entender, entonces, que la sola acción de la demandante para instar por la investigación del acoso sexual que refiere por parte de su superior jerárquico o empleador, constituya per se una injuria a la persona de éste, ni sobre la base de la entidad de los comportamientos a que alude la misma, ya que nunca sería posible distinguir una denuncia de otra por cuanto todas supondrían un ánimo de injuriar; ni tampoco como resultado del examen ex post de todos los factores reunidos en sede administrativa que, además de no dar cuenta de una gestión abusiva, se concatenan, necesariamente, con las particulares circunstancias que pueden afectar una indagación de esta índole, de forma tan o más dramática que en sede judicial.

Decimotercero: Que adolece, por tanto, de fundamento fáctico y jurídico, la nulidad pedida por la sociedad emplazada insistiendo en el valor probatorio que a su juicio revisten determinados elementos aportados por su parte, desde que el sólo desacuerdo con las apreciaciones

efectuadas por los sentenciadores o la significación que éstos le otorgaron a algunos de los antecedentes por sobre otros, no conforman, en la especie, una infracción de las normas reguladoras de la prueba en la materia, más aún desde la perspectiva de un recurso como el impetrado y que necesariamente exige la trasgresión de algunos de los principios integrantes de la sana crítica a partir de los hechos de la causa, inconsecuencia que, según se explicó, no se observa.

Decimocuarto: Que conforme lo razonado, de acuerdo a los presupuestos asentados en el fallo atacado y el correcto entendimiento de la causal de despido invocada por la empleadora, siempre a la luz de los criterios de la lógica y las máximas de experiencia, los sentenciadores no han incurrido en los yerros denunciados, por lo que la nulidad pedida deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 463 del Código del Trabajo y 764, 765, 767 y 783 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo** deducido por la demandada a fojas 117, contra la sentencia de veintitrés de febrero del año en curso, que se lee a fojas 116.

Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.

Regístrese y devuélvase.

N° 2.654-09

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Rosa María Maggi D., Ministro Suplente señor Julio Torres A., y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob Ch., y Patricio Figueroa S. No firma el Abogado Integrante señor Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 01 de julio de 2009.

Autoriza la Secretaria de la Corte Suprema, señora Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a uno de julio de dos mil nueve, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.